

Cartagena de Indias D.T y C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

## I.- IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, RADICACIÓN Y PARTES INTERVINIENTES

<b>Medio de control</b>	<b>NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO</b>
<b>Radicado</b>	<b>13-001-23-33-000-2019-00387-00</b>
<b>Demandante</b>	<b>JAIME CASTRO JULIO</b>
<b>Demandado</b>	<b>NACIÓN- FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG)</b>
<b>Tema</b>	<i>Caducidad del medio de control/ Reconocimiento de sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías definitivas</i>
<b>Magistrado Ponente</b>	<b>MOISÉS RODRÍGUEZ PÉREZ</b>

## II.- PRONUNCIAMIENTO

La Sala de decisión No. 004 de decisión de esta Corporación, decide en primera instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor Jaime Castro Julio contra el Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio.

## III.- ANTECEDENTES

### 3.1. La demanda<sup>1</sup>.

#### 3.1.1 Pretensiones<sup>2</sup>

PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto ficto negativo que se generó con la petición radicada el 21 de marzo de 2018 ante la Secretaría de Educación Departamental de Bolívar, donde se solicitó el reconocimiento y pago de una sanción moratoria producto del retardo en el pago de las cesantías definitivas.

SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, se tenga que el pago de las cesantías definitivas, se produjo con la Resolución No. 0221 del 6 de febrero de 2019.

TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior, dicte una nueva resolución en la que se le reconozca y pague la indemnización moratoria por retardo en el pago de sus cesantías definitivas.

CUARTA: Que como consecuencia de la pretensión 1 y 2, pague al demandante la suma de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$131.196.565) por cada día de retardo, por el no pago oportuno y completo de sus cesantías definitivas;

<sup>1</sup> Fols. 1-17 doc. 01 exp. Digital

<sup>2</sup> Fols. 3 y 65-67 doc.01 exp. Digital

habida cuenta que a la fecha han trascurrido, 495 días de retardo, desde que se hizo exigible la sanción.

### **3.1.2 Hechos<sup>3</sup>**

La parte demandante desarrolló los argumentos fácticos, que se ha de sintetizar así:

Manifestó que se desempeñó como docente adscrito a la Secretaría de Educación Departamental de Bolívar, por más de 40 años, siendo reconocida sus cesantías definitivas por Resolución No. 3803 del 16 de diciembre de 2016, sin que se tuviera en cuenta para su liquidación la prima de servicios, renunciando a la interposición de recurso de reposición.

Agregó que, la petición de reconocimiento y pago de cesantías definitivas fue presentada el 10 de septiembre de 2016, venciendo el término de los 70 días el 23 de diciembre la misma anualidad, comenzando a correr la sanción moratoria desde esta fecha por el no pago oportuno de las cesantías, por la no inclusión de la prima de servicios, ni horas extras como factores salariales al momento de liquidar su prestación.

El 21 de marzo de 2018, solicitó el reconocimiento y pago de la prima de servicios para liquidar las cesantías y la sanción moratoria por el no pago oportuno y completo de las cesantías al omitir la inclusión de estos factores, posteriormente, en Resolución No. 0221 del 22 de enero de 2019 se revisa la cesantía definitiva y se ordena el pago de un ajuste, ordenando incluir la prima de servicios, y denegando el reconocimiento y pago de la sanción moratoria.

Finalmente, manifestó que el pago de la suma reconocida en la Resolución No. 0221 del 22 de enero de 2019, se verificó el 20 de marzo de 2019, sin embargo, al omitir pagar de manera completa las cesantías definitivas hace surgir la indemnización moratoria desde la solicitud de reconocimiento hasta el pago efectivo.

### **3.1.3. Normas violadas y concepto de violación**

Legales: Ley 6 de 1945, ley 65 de 1946, ley 244 de 1995 y ley 1071 del 2006, ley 1755 del 2015. Reglamentarias: Decreto 1160 de 1947, Decreto 1045 de 1978 y el Decreto 1545 del 2013.

Manifestó que, si la administración motu proprio se dio cuenta del error cometido al momento de liquidar las cesantías definitivas del demandante, pues omitió el pago de la prima de servicios como factor salarial, debió también reconocerle la sanción moratoria al docente en el entendido que no le había pagado la totalidad de su prestación definitiva.

---

<sup>3</sup> Fols. 3-9 doc.01 exp. Digital

### **3.2 CONTESTACIÓN<sup>4</sup>**

Se opuso a la totalidad de pretensiones de la demanda. Señaló que, en el presente asunto se encuentra probada la excepción de caducidad por cuanto la demanda debió presentarse dentro del término de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación del acto de reconocimiento de las cesantías, so pena de configurarse el fenómeno de la caducidad en el caso concreto.

De igual forma, presentó excepción de: (i) legalidad del acto administrativo demandado; (ii) improcedencia de la sanción moratoria en casos de reajuste de la liquidación de cesantías, e (iii) improcedencia de condena en costas.

### **3.3 ACTUACIÓN PROCESAL**

- La demanda fue repartida el 01 de agosto de 2019<sup>5</sup>.
- El auto inadmisorio fue proferido el 20 de octubre de 2020<sup>6</sup>.
- Posteriormente fue admitida por auto del 12 de abril de 2021<sup>7</sup>, decisión que fue notificada a la parte demandada el 27 de abril de 2021<sup>8</sup>.
- La contestación de la demanda fue presentada el 11 de junio de 2021<sup>9</sup>, corriéndose traslado de la misma el 1 de octubre de 2021<sup>10</sup>.
- Por auto del 01 de septiembre de 2022, se dispuso dictar sentencia anticipada<sup>11</sup>.

### **3.5 ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Las partes no presentaron escrito de alegatos y el Ministerio Público no rindió el concepto de su competencia.

## **IV.- CONTROL DE LEGALIDAD**

Tramitada la primera instancia y dado que, no se observa causal de nulidad, impedimento o irregularidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a decidir la controversia suscitada entre las partes, previas las siguientes,

## **V.- CONSIDERACIONES**

### **5.1. Competencia.**

Es competente esta Corporación para conocer el presente proceso en primera instancia, por disposición del artículo 152 numeral 2 de la Ley 1437 de 2011.

<sup>4</sup> Fols. 83-96 doc.01 exp. Digital

<sup>5</sup> Fol. 57 doc.01 exp. Digital

<sup>6</sup> Fol. 59-60 doc.01 exp. Digital

<sup>7</sup> Fol. 73-74 doc.01 exp. Digital

<sup>8</sup> Fols. 75-79 doc.01 exp. Digital

<sup>9</sup> Fols. 83-96 doc.01 exp. Digital

<sup>10</sup> Fol. 125 doc.01 exp. Digital

<sup>11</sup> Doc. 03 exp. digital

## 5.2 Problema jurídico

De conformidad con los argumentos expuestos en la demanda, y en el escrito de contestación, corresponde a esta Sala establecer si:

*¿Se encuentra probada la excepción de caducidad propuesta por la entidad demandada?*

De resolverse de manera negativa lo anterior, se entrará a estudiar si:

*¿Tiene derecho el señor JAIME CASTRO JULIO al reconocimiento de la sanción moratoria por el retardo en el pago de sus cesantías definitivas?*

## 5.3 Tesis de la Sala

La Sala encuentra que existe caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, como quiera que el acto administrativo demandable, en este evento, es aquel que mediante el cual se resolvió la sanción moratoria, por lo tanto, era dentro de los 4 meses posteriores a su notificación que debía presentarse la demanda ante esta Jurisdicción, y este presupuesto no se cumplió.

Por otro lado, el demandante no tiene derecho al reconocimiento de la sanción moratoria por no haberse incluido la prima de servicios en la liquidación de sus cesantías definitivas, toda vez que, dicha sanción solo fue contemplada para los casos de mora en el reconocimiento y pago de las cesantías, pero no en caso de mora en la reliquidación de las cesantías.

## 5.4 MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

### 5.4.1. De la sanción moratoria por pago tardío de cesantías parciales o definitivas en favor de docentes.

La sanción moratoria se encuentra prevista en la Ley 244 de 1995, la cual en su artículo 1 prescribe, que los servidores públicos de todos los órdenes, pueden solicitar las cesantías ante la entidad patronal, a quien le asiste la obligación de expedir la Resolución correspondiente dentro de los 15 días hábiles siguientes a su presentación, si reúne los requisitos determinados por la Ley. Cuando la solicitud está incompleta se debe informar al solicitante dentro de los 10 días hábiles siguientes a su recibo, señalándole de manera expresa los requisitos faltantes, y una vez aportados, esa solicitud se debe resolver dentro de los 15 días hábiles siguientes.

De igual forma, preceptuó en su artículo 2º que la entidad tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles a partir de la fecha en que adquiera firmeza el

acto de reconocimiento, so pena de que la entidad obligada deba pagar al titular un día de salario por cada día de retardo hasta su pago efectivo.

En el párrafo del citado articulado, se señaló que, en caso de mora en el pago de esas cesantías definitivas, la entidad incumplida debe reconocer y cancelar al beneficiario un día de salario por cada día de retardo hasta que su pago se haga efectivo, para lo cual solo basta la acreditación de la no cancelación dentro del término legal previsto. Cabe señalar que la citada norma fue adicionada y modificada por la Ley 1071 de 2006.

Sobre la interpretación de estas normas, el H. Consejo de Estado, en sentencia de la Sala Plena de fecha 27 de marzo de 2007, expediente No. 2777-2004, M.P. Dr. Jesús María Lemos Bustamante, se llegó a las siguientes conclusiones relevantes:

*"(...) 5.3. Formulación de las distintas hipótesis para el reconocimiento de la indemnización moratoria por la falta de pago oportuno de las cesantías definitivas. (...) Conforme al texto de la norma se presentan varias hipótesis, a partir de la petición del interesado, que pueden dar lugar a la existencia de un conflicto, así: 5.3.1 La administración no resuelve el requerimiento del servidor público sobre la liquidación de sus cesantías. 5.3.2 La administración no reconoce las cesantías y, por ende, no las paga. 5.3.3. Lo administración efectúa el reconocimiento de las cesantías. En este caso pueden ocurrir varias posibilidades: 5.3.3.1. Las reconoce oportunamente pero no las paga. 5.3.3.2. Las reconoce oportunamente pero las paga tardíamente. 5.3.3.3. Lo reconoce extemporáneamente y no las paga. 5.3.3.4. Las reconoce extemporáneamente y las paga tardíamente. 5.3.4. Existe pronunciamiento expreso sobre las cesantías y/o sobre la sanción y el interesado no está de acuerdo con el monto reconocido. En las situaciones aludidas que impliquen discusión respecto del contenido mismo del derecho la Sala considera que la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, en razón de que el origen de la suma adeudada es una acreencia laboral.*

En ese orden de ideas, el Máximo Órgano de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa establece que, de conformidad con la regla jurisprudencial fijada por la Sección Segunda de dicha Corporación, la sanción moratoria es exigible de acuerdo a distintas hipótesis que se pueden apreciar en el siguiente cuadro que se transcribe:

HIPOTESIS	NOTIFICACION	CORRE EJECUTORIA	TÉRMINO PAGO CESANTÍA	CORRE MORATORIA
PETICIÓN SIN RESPUESTA	No aplica	10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto	45 días posteriores a la ejecutoria	70 días posteriores a la petición
ACTO ESCRITO EXTEMPORANEO (después de 15 días)	Aplica pero no se tiene en cuenta para el computo del termino de pago	10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto	45 días posteriores a la ejecutoria	70 días posteriores a la petición
ACTO ESCRITO EN TIEMPO	Personal	10 días, posteriores a la notificación	45 días posteriores a la ejecutoria	55 días posteriores a la notificación
ACTO ESCRITO EN TIEMPO	Electrónica	10 días, posteriores a certificación de acceso al acto	45 días posteriores a la ejecutoria	55 días posteriores a la notificación
ACTO ESCRITO EN TIEMPO	Aviso	10 días, posteriores al siguiente de entrega del aviso	45 días posteriores a la ejecutoria	55 días posteriores a la entrega del aviso
ACTO ESCRITO EN TIEMPO	Sin notificar o notificado fuera de término	10 días, posteriores al intento de notificación personal <sup>118</sup>	45 días posteriores a la ejecutoria	67 días posteriores a la expedición del acto
ACTO ESCRITO	Renunció	Renunció	45 días después de la renuncia	45 días desde la renuncia
ACTO ESCRITO	Interpuso recurso	Adquirida, después de notificado el acto que lo resuelve	45 días, a partir del siguiente a la ejecutoria	46 días desde la notificación del acto que resuelve recurso
ACTO ESCRITO, RECURSO SIN RESOLVER	Interpuso recurso	Adquirida, después de 15 días de interpuesto el recurso	45 días, a partir del siguiente a la ejecutoria	61 días desde la interposición del recurso

Como se aprecia del anterior cuadro, en las hipótesis planteadas los términos inician a correr desde la petición o solicitud del reconocimiento de las cesantías o bien desde que exista el acto escrito que resuelve sobre el reconocimiento de las cesantías. Es decir, en ninguna de las hipótesis analizadas por esa Alta Corporación, se contempló la posibilidad que corriera la sanción moratoria en los casos en que se hayan reconocido y pagado las cesantías y posteriormente se ajuste el valor liquidado por algún error en la liquidación.

Ahora bien, se debe precisar que la Ley 91 de 1989, modificada por el Decreto 2831 de 2005, norma que creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en forma especial reguló lo atinente al reconocimiento y pago de las cesantías del sector docente, en la cual no se contempló la figura de la sanción por mora, situación que ha generado controversias y posiciones encontradas al respecto.

No obstante, el H. Consejo de Estado<sup>12</sup>, en proveído cuyos fundamentos se comparten, ha reconocido la aplicación de la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006 a los docentes del sector públicos<sup>13</sup>, siendo esta posición, a criterio de esta Sala de Decisión, la que mejor responde al principio de favorabilidad que debe primar en materia laboral y al de igualdad material de los docentes frente a los otros servidores públicos que sí se ven cobijados por dicha prerrogativa. Así las cosas, ha de concluir la Sala que para el caso de los docentes del sector público también resulta aplicable la sanción moratoria establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

## **5.5 CASO CONCRETO**

### **5.5.1. Análisis crítico de la prueba frente al marco normativo y jurisprudencial.**

El señor Jaime Castro Julio solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, mediante petición elevada el 21 de marzo de 2018<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Consejo de Estado- Sección Segunda del Consejo de Estado Sección Segunda Subsección "B". M.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez, radicación No. 23001-23-31-000-2004-00069-02(0859-08). actor: Hugo Carlos Pretelt Naranjo. sentencio del 21 de mayo de 2009.

<sup>13</sup> CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN 13-Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VELE-Bogotá, D.C. veintidós (22) de enero de dos mil quince(2015)-Radicación número: 73001-2331-000-2013-00192-01 (0271-14J-Actor: YANETH LUCIA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ-Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - MUNICIPIO DE IBAGUÉ (TOLIMA)-Referencia: AUTORIDADES NACIONALES - LEY 1437 DE 2011.

<sup>14</sup> Fols. 29-35 y fol. 21 doc. 01 exp. digital

En virtud de lo anterior, la Secretaria de Educación de Cartagena, procedió a expedir la Resolución 02221 del 22 de enero de 2019<sup>15</sup>, por medio de la cual ajustó la cesantía definitiva del actor incluyendo la prima de servicios y frente a la sanción moratoria, le informó que para su viabilidad era necesario que se encontrara pago el reajuste a dicha prestación, ya que a partir de la fecha de pago se determinaba la existencia o no de mora en el pago. En dicho acto administrativo se ordenó el pago de un excedente de \$11.410.394 en favor del señor Castro Julio, actuación que se hizo efectiva el 20 de marzo de 2019<sup>16</sup>.

Resalta esta Sala que, si bien el demandante solicita la nulidad del acto ficto del 21 de marzo de 2018, esta Corporación encuentra que, ambas peticiones tanto la de inclusión de la prima de servicios, como la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías definitivas fueron resueltas a través de la Resolución 02221 del 22 de enero de 2019, refiriéndose a la petición de sanción mora de la siguiente forma:

Para establecer la viabilidad del reconocimiento de la sanción por mora es necesario que se encuentre pagado el ajuste a la cesantía definitiva ya que la fecha de pago de dicha prestación determina la existencia o no de mora en el pago. Una vez se encuentre pago el ajuste y se solicite el reconocimiento de la sanción por mora, la Secretaría de Educación debe realizar la radicación en página web como cesantías, cesantía definitiva, fallo contencioso al ajuste, ya que si el expediente viene radicado como cesantía definitiva al ajuste no será posible otorgar el visto bueno. De igual forma, para evitar devoluciones innecesarias se solicita llegar dentro del expediente copia de la resolución que reconoció la cesantía parcial o definitiva, sobre la cual se reconocerá la sanción moratoria por vía administrativa, copia del certificado de salarios a la fecha de retiro definitivo del servicio.

#### - **Caducidad del medio de control:**

La parte demandada solicita que se declare la caducidad de este medio de control, toda vez que a su juicio el acto administrativo que debía demandarse era la Resolución 3803 del 16 de diciembre de 2016, por medio de la cual se liquidaron inicialmente las cesantías. Sin embargo, esta Sala no comparte esa posición, teniendo en cuenta que el acto que le resolvió al accionante el reconocimiento de la sanción moratoria, fue la Resolución 02221 del 22 de enero de 2019.

Ahora bien, pese a lo anterior se encuentra que el acto que le resolvió al accionante el reconocimiento de la sanción moratoria, esto es, la Resolución 02221 del 22 de enero de 2019, fue notificada el 6 de febrero de 2019<sup>17</sup>, por lo que los 4 meses se vencían el 7 de junio de la misma anualidad, radicándose la conciliación el 7 de junio de 2019<sup>18</sup> (suspendiendo por 1 día el término de caducidad), el acta de no conciliación se expidió el 30 de julio del mismo año, y la demanda se presentó el 01 de agosto, debiendo radicarse el 31 de julio de 2019, por ser día hábil siguiente a la expedición

Fols. 21-22 doc. 01 exp. digital

<sup>16</sup> Fol. 25 doc. 01 exp. digital

<sup>17</sup> Fol. 23 doc. 1 exp. digital

<sup>18</sup> Fol 27-28 doc 1 exp.digital

de la constancia. Así las cosas, si se configuró la excepción de caducidad del medio de control.

De acuerdo con lo expuesto, se tendrá por probada la excepción de caducidad del medio de control.

**- Del fondo del asunto:**

Aclara esta Sala que, con la subsanación de la demanda, la parte actora, solicita la nulidad del acto ficto generado con la petición radicada el 21 de marzo de 2018, que como se aclaró en párrafos anteriores, no es un acto ficto por encontrarse resuelto, adicionalmente, solicita que se tenga que el pago de las cesantías definitivas, se produjo con la Resolución No. 0221 del 6 de febrero de 2019, sin embargo, esta Sala aclara que, lo ordenado a cancelar en el acto antes mencionado es la diferencia por el reajuste con ocasión a la inclusión de la prima de servicios, porque el pago por concepto de lo reconocido por cesantía definitiva fue cancelado el 06 de febrero de 2017<sup>19</sup> por la suma de \$19.021.096.

Una vez aclarado lo anterior, sobre la procedencia de la sanción moratoria por errores en la liquidación de cesantías, el Consejo de Estado en sentencia de 31 de octubre de 2019, manifestó lo siguiente:

*“Ha de entenderse que la sanción moratoria estatuida en esta disposición es contra el empleador moroso y en beneficio del trabajador o empleado, puesto que el auxilio de cesantías debe ser recibido de manera oportuna en el momento que se necesita. Por ello, el legislador estableció una severa sanción de un día de salario por cada uno de retardo hasta que se haga efectivo su pago. Sin embargo, en el presente asunto, la entidad accionada, según se colige de las pruebas recaudadas y de los razonamientos expuestos en el proceso, pagó de manera oportuna el auxilio de cesantía correspondiente al 2003, pero sin incluir el sobresueldo recibido por el demandante durante su vinculación laboral, lo cual ocasionó una diferencia de \$432.056 en el monto total. Esta divergencia no es motivo para que se imponga la sanción antes referida, puesto que lo se castiga no es el error en que se incurrió en la liquidación, sino el retraso del pago en su oportunidad legal.” (Negrilla fuera de texto)<sup>20</sup>*

La misma Corporación explicó los límites y naturaleza de la sanción moratoria, así:

*“Así, debido a la naturaleza sancionadora de la norma y en tal virtud, al regirse por el principio de legalidad como una garantía esencial del derecho al debido proceso en los términos del artículo 29 de la Constitución Política, toda sanción deberá estar consagrada en una Ley preexistente y frente a una conducta determinada, pues en materia sancionadora se impone una interpretación restrictiva, lo que excluye aplicar una interpretación extensiva o analógica, concebida en los términos de la Corte Constitucional, como un límite infranqueable por la actividad judicial. Lo anterior, permite a la Subsección establecer que la sanción moratoria únicamente podrá aplicarse por el supuesto determinado previamente en la Ley, sin que a través de una interpretación extensiva el órgano judicial pueda extenderla a conductas que no hayan sido contempladas por el legislador, máxime cuando*

<sup>19</sup> Fol. 37 doc. 1 exp. digital

<sup>20</sup> CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente: 08001-23-31-000-2011-00847-01 (4787-2014)

*el artículo 230 Superior previó la sujeción de los jueces en sus providencias, al imperio de la Ley. De este modo, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que la finalidad del legislador al contemplar la sanción moratoria fue apremiar al empleador a la consignación oportuna de las cesantías anualizadas, debido a la importancia de esta prerrogativa laboral destinada a cubrir necesidades básicas del servidor público relacionadas con educación y vivienda de su núcleo familiar."<sup>21</sup>*

Conforme a lo anterior, no es procedente el reconocimiento de la sanción moratoria por errores en la liquidación de las cesantías definitivas del demandante, pues, si bien, se causó una diferencia en la liquidación de sus cesantías al no tenerse en cuenta la prima de servicios como factor salarial, el pago tardío de dicha diferencia no puede considerarse como mora en el pago de la prestación, toda vez que la norma no contempla dicho supuesto. La sanción moratoria fue prevista únicamente para los casos en que exista mora en el reconocimiento y pago de las cesantías, no de su reliquidación.

Por otra parte, también le asiste razón a la entidad demandada cuando al contestar la demanda expone que el demandante era un docente sometido a régimen de cesantías retroactivas, lo cual se observa en el cuadro de liquidación que obra en la Resolución No. 3803 del 16 de diciembre de 2016, ya que entró al servicio el 18 de marzo de 1975 y trabajó hasta el 29 de febrero de 2016. Sabido es que, este tipo de trabajadores no les es aplicable la sanción moratoria por el régimen mismo de su liquidación.

En virtud de lo anterior, se negarán las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta que la entidad demandada no incurrió en los supuestos de Ley que exige la normatividad para que se configure la sanción moratoria.

## **5.6. Condena en costas.**

El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala, *“Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”*; así mismo, el Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 determina que *“En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”*.

Por otra parte, el artículo 365 del Código General del Proceso señala que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva de forma desfavorable el asunto. Como quiera que la demanda no prosperó debería condenarse en costas, sin embargo, debido a que,

---

<sup>21</sup> CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho. Radicación: 08001-23-33-000-2014-00389-01.-Interno: 0240-2016



efectivamente, hubo un error en la liquidación de las cesantías definitivas del actor, que llevó a una reliquidación de la misma, por lo que la tesis sostenida por el demandante no contiene una manifiesta carencia de fundamento legal; otra cosa es que no fueran acogidas sus pretensiones, por ello, se abstendrá de condenar la Sala en costas.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión No. 004 del Tribunal Administrativo de Bolívar, Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

**VI. FALLA:**

**PRIMERO: DECLARAR** probada la excepción de caducidad del medio de control.

**SEGUNDO: NEGAR** las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

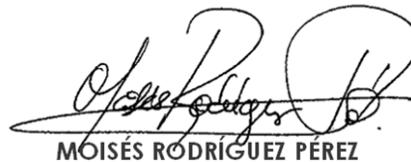
**TERCERO: ABSTENERSE** de condenar en costas de primera instancia.

**CUARTO:** Déjense las constancias de rigor en los sistemas de registros.

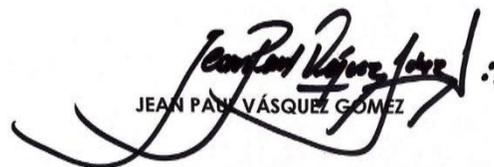
**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

*Constancia: El proyecto de esta providencia fue estudiado y aprobado en sala No.021 de la fecha.*

**LOS MAGISTRADOS**

  
MOISÉS RODRÍGUEZ PÉREZ

  
EDGAR ALEXI VÁSQUEZ CONTRERAS

  
JEAN PAUL VÁSQUEZ GÓMEZ